

Chillán, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En la causa **RUC 2300117508-4, RIT 110 -2024** del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, con fecha doce de agosto del año en curso, se dictó sentencia por la cual se absolvió a **Álvaro Alexis Ramos Hormazábal** de los cargos que lo supusieron autor del delito de maltrato habitual en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 14 de la ley 20.066, supuestamente cometido en contra de Jenifer Vera Durán en la comuna de Chillán, los días 27 de noviembre de 2022 y 26 de diciembre del mismo año.

Por otra parte, el fallo condenó a Ramos Hormazábal, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor ejecutor, del delito de femicidio íntimo, en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal, perpetrado el día 29 de enero de 2023 en la comuna de Chillán, en la persona de Jenifer Andrea Vera Durán.

Se dispuso el cumplimiento efectivo la pena corporal, sirviéndole de abono al condenado el tiempo que con motivo de esta causa ha permanecido privado de libertad desde el día 26 de febrero de 2023, según consta en la certificación de la ministro de fe del tribunal.

Contra esta sentencia, el defensor particular don Rodrigo Orrego Luengo, dedujo recurso de nulidad, invocando la causal señalada en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

Declarado admisible, se procedió a la vista el día 17 de septiembre pasado, oportunidad en que alegaron la parte recurrente y el representante del Ministerio Público.

Concluida la vista, se fijó la audiencia del día de hoy para la comunicación de la sentencia.

Considerando:



Primero: Que, el recurrente considera que concurre la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, al haberse omitido en la sentencia los requisitos de la letra c) del artículo 342 del mismo cuerpo legal; en particular la ausencia de fundamentación, al valorar sólo parcialmente la prueba, sin hacerse cargo de todas las alegaciones de la defensa en orden a la recalificación del delito.

A continuación, transcribe los basamentos Octavo, Noveno y Décimo del fallo de primer grado, y añade, que la sentencia ha incurrido en una omisión de valoración completa de todos los medios de prueba, unido al hecho de no hacerse cargo de las alegaciones de la defensa en orden a estimar el delito como un femicidio tentado o bien como un delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Explica que en el alegato de clausura la defensa pidió expresamente al tribunal recalificar los hechos a alguna de las siguientes figuras: lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar o femicidio tentado. En ambos casos la primera discusión que planteada era definir si estábamos frente a un dolo de lesiones o bien a un dolo de matar.

En una primera línea argumentativa se expuso que el dolo era de lesionar y, por ende, el delito debía ser calificado como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, para lo anterior, se expusieron los siguientes puntos: tanto víctima como imputado manifestaron que el día anterior a los hechos materia del delito de femicidio pasaron la noche juntos. La víctima indicó que fue bajo retención del acusado, mientras que este último declaró que pasaron la noche juntos de manera voluntaria. En lo que no hay duda, es que pasaron la noche juntos. Como defensa se expuso lo ilógico de pensar que, teniendo toda la noche para haber atentado contra la vida de la víctima, estando solos en la casa, el imputado hubiera preferido hacerlo al día siguiente, en la vía pública, con plena luz de día, frente a una cancha en que se desarrollaba un campeonato de voleibol.

Como segundo punto se expuso que la única testigo presencial de los hechos calificados como femicidio, señaló que estaba junto a sus compañeras descansando en una plazoleta pues habían terminado de jugar un partido de voleibol, instantes en que escuchan ladrar unos perros, ven que se levanta



polvo y observan al imputado sobre la víctima, con una mano en el cuello y la otra no recuerda si en el suelo o el hombro. Entre que ven la agresión, se acercan y el acusado huye, no pasaron más de 10 segundos. Se planteó por la defensa que la duración de esa agresión, no más de 10 segundos estando el imputado sobre la víctima, da cuenta que no hay un dolo de matar, sino solo de lesionar.

Como tercer elemento para desacreditar el dolo de matar, se adujo que la declaración de la testigo presencial daba cuenta que el acusado solo tenía una mano en el cuello de la víctima y que, si esto lo relacionábamos con la declaración de la doctora que atendió a doña Jeniffer después de la agresión, llevaba a concluir que la intención solo era lesionar. Ello, por cuanto si hubiera querido matarla, hubiera utilizado sus dos manos y presionado el cuello de la víctima con todas sus fuerzas o a lo menos de una manera extrema o violenta, pero ello fue descartado por la especialista, quien al ser contrainterrogada indicó expresamente que al evaluar a la paciente determinó que la agresión no presentaba herida ni sangrado activo, y que, a su impresión, esta compresión cervical fue de una forma no tan extrema o violenta puesto que no había fractura o lesiones contundentes adyacentes de otra envergadura.

Continúa el letrado manifestando que, como defensa esgrimió que si el tribunal estimaba que había dolo de matar, el delito estaba en grado de desarrollo tentado, exponiendo que tanto la tentativa como la frustración requieren una intervención ajena a la voluntad de actor para configurarse, pues de otro modo, estaríamos frente a una tentativa desistida, la que no es punible. Bajo ese contexto, se debía tener en cuenta el momento en que la acción del acusado fue interrumpida por los testigos que llegaron al lugar. Como se señaló, de la declaración de la única testigo presencial se extrae sin necesidad de interpretación, que el acusado solo tenía puesta una mano en el cuello de la víctima, que esa dinámica no duró más de 10 segundos y si se une a lo declarado por la doctora que atendió a doña Jennifer, la compresión no fue de forma tan extrema o violenta. Es decir, el acusado dio principio de ejecución al delito de femicidio por hechos directos, pero faltaron uno o más para su complemento, por ejemplo, colocar las dos manos sobre el cuello, ejercer mayor presión o violencia en la ejecución, todos, elementos propios y que no



alcanzó a desarrollar por la intervención de terceras personas, es decir, le faltó completar la acción.

Aduce el impugnante, que lo dicho es trascendental a la hora de configurar la infracción alegada, pues como puede observarse del considerando octavo de la sentencia recurrida y que dice relación con la valoración de la prueba, el tribunal sólo se hace cargo superficialmente de una de las alegaciones vertidas por la defensa, esto es, la recalificación de los hechos a un delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Es más, en el considerando aludido pide recordar que la defensa no cuestionó los hechos, sino que únicamente pidió su recalificación a un delito de lesiones, argumentando por qué a su juicio habría dolo de matar, pero obviando de forma evidente la segunda discusión que se planteó expresamente en la clausura, esto es, que, si se estimaba que había dolo de matar, la figura debía ser un delito tentado.

Añade que no existe por parte del tribunal un razonamiento de por qué la interrupción de la acción por parte de los terceros y el resto de los argumentos expuestos no permiten catalogar el hecho como femicidio tentado, sino que el tribunal ni siquiera lo menciona como un punto de discusión, en los términos que fue expresamente planteado.

Agrega el compareciente que dos circunstancias ratifican lo expuesto: en la transcripción del alegato de clausura de la defensa en la sentencia, se observa que el tribunal no señaló ninguno de los argumentos expuestos en el mismo en relación con el delito tentado, obviando que se pidió centrar la discusión en el dolo, cuestión que precisamente el tribunal tomó como principal argumento para descartar el delito de lesiones. Es decir, si el tribunal descartó expresamente el delito de lesiones por estimar que había dolo de matar, acto seguido debió seguir con la segunda discusión que se le pidió resolver, esto es, que habiendo dolo de matar, el delito era tentado y no frustrado, discusión que derechamente evadió.

La descripción que se hace en la sentencia del relato de la médico que atendió a la víctima el día de los hechos contiene un error de transcripción fundamental. En el considerando sexto, página 18, declaración de doña



Janlenys Varela Pérez, a la consulta de la defensa, la sentencia señala lo siguiente “...*En su declaración dijo que esta compresión extrema o violenta, conclusión a la que llega porque que no había fracturas o lesiones contundentes adyacentes de otra envergadura...*”, en términos que lo que la testigo dijo es que la compresión NO había sido en términos violentos o extremos por cuanto no había fractura o lesiones contundentes adyacentes. Este error es esencial, pues parte fundamental de las alegaciones de la defensa, particularmente para argumentar en orden a estar en presencia de un delito tentado, es el carácter de las lesiones y el tribunal en su valoración no hace ninguna mención a esta frase esgrimida por el médico tratante, y además, la consigna en forma contraria a lo declarado. (declaración de Janlenys Varela Pérez minuto 15:45 al 19:45).

Enfatiza el letrado que el tribunal omitió valorar toda la prueba rendida en juicio, pues la valoración o el estándar que se exige al juzgador, pasa necesariamente por los planteamientos expuestos por los intervinientes, así, si la defensa le expone al tribunal hacerse cargo de una determinada parte del relato de un testigo para fundar su pretensión, y el tribunal lisa y llanamente no se pronuncia, o refiriéndose a ese testigo omite entrar al debate de lo planteado, no puede concluirse que su valoración ha sido completa. Lo mismo sucede si el tribunal se hace cargo solo de una de las recalificaciones solicitadas, o transcribe de forma errada la declaración de un testigo cuyo testimonio luego utiliza para fundar el veredicto condenatorio. Este punto es relevante, porque a mayor abundamiento, y particularmente hablando de la solicitud de recalificación del delito de femicidio frustrado al de femicidio tentado, ni siquiera podemos decir que hay infracción a los límites que el legislador impuso para la valoración de la prueba, puesto que el tribunal no se hizo cargo de la alegación, es decir, no hay fundamentación, ni siquiera podemos entrar a discutir si fue acertada o errada, porque no existe.

Por otra parte, indica que aun cuando el perjuicio debe presumirse en un motivo absoluto de nulidad, la omisión de una correcta fundamentación como lo ordena el artículo 297 del Código Procesal Penal, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que el sólo hecho de



condenar a su representado por un delito en grado de desarrollo tentado, hacía disminuir la pena en concreto a aplicar.

Finalmente, pide a esta Corte, anular parcialmente tanto la sentencia como el juicio oral, solo respecto del delito de femicidio frustrado y determinar el estado en hubiere de quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral por el delito ya referido.

Segundo: Que, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “*Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) cuando, en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)*”. Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: “*Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297*”.

Tercero: Que, a su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal dispone en primer lugar, la facultad que tienen los tribunales de apreciar la prueba con libertad, lo que permite hacer una valoración de los antecedentes de juicio con mayor latitud, puesto que el legislador no ha consignado en cada caso, límites en dicha ponderación, la única exigencia que se establece para tal raciocinio será la de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Además, dicha disposición impone el deber del juzgador de hacerse cargo de toda la prueba producida en el juicio y por último, también se impone que en la valoración de la prueba en la sentencia se deba especificar el o los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias, lo que permitirá la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones. Esta exigencia se ha concretado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, cuando se especifica como uno de los requisitos de la sentencia, el que ésta contenga la exposición clara,



lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.

Cuarto: Que, en relación al rol que desempeña la lógica en la fundamentación y, particularmente, en la actividad de análisis de las probanzas producidas, debe precisarse que *“la lógica corresponde al estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen (correcto) pensamiento, del mal (incorrecto) pensamiento”*, significándose con ello que permite asegurarse de la corrección formal del argumento. Posibilita que la sentencia esté *formalmente* bien fundada, lo que se garantiza en la medida que se respeten las leyes del pensamiento. Esto abarca tanto lo que se refiere a la manera de estructurar el argumento, cuanto a la validez del proceso que deriva en la inferencia, vale decir, la necesaria conexión que ha de existir entre las premisas y la conclusión.

Quinto: Que, la motivación fáctica supone la necesidad de expresar la valoración probatoria, compuesta por un examen formal y sustantivo de la prueba, individual y conjunto de ella, con miras a definir el grado de credibilidad, pero también de corroboración y de soporte que las probanzas otorgan a la hipótesis fáctica (juicio de probabilidad).

Sexto: Que, en la especie, según se lee en el basamento Noveno del fallo impugnado, los sentenciadores tuvieron por acreditados los siguientes hechos: *“En horas de la mañana del día 29 de enero de 2023, en las cercanías de calle Saltos del Itata de la Villa Doña Francisca de la ciudad de Chillán, Álvaro Alexis Ramos Hormazábal, con la intención de dar muerte a Jenifer Andrea Vera Durán, quien en ese momento era su exconviviente, la tomó por la espalda con el antebrazo haciendo presión y que luego, como ella se resistía, cayeron al suelo, oportunidad en la que Ramos Hormazábal, le apretaba el cuello con una mano y con su rodilla en la zona abdominal. Que en esos instantes se acercaron al lugar donde ocurría este hecho varias personas, motivo por el cual Ramos Hormazábal se fue rápidamente del lugar.”*

Séptimo: Que, en lo concerniente a la calificación jurídica y grado de ejecución, establece el basamento Décimo que: *“los hechos descritos*



configuran el delito de femicidio íntimo, previsto y sancionado en el artículo 390 bis, es decir, un hombre (el condenado) mató a una mujer (la víctima), con quien tuvo una relación de convivencia. Que, en la especie el delito se frustró, porque el sentenciado Ramos Hormazábal puso todo de su parte para alcanzar la consumación, la que no se verificó por causas ajenas a su voluntad, como fue el hecho que llegara gente al lugar de comisión al delito. Señalar, que el encartado tenía sus manos en el cuello de la víctima y lo presionaba hacia el piso están él encima de ella. Así, se puede afirmar que la acción típica estaba completa, no le faltaban elementos para la consumación, pero esta no se produjo porque llegaron personas al lugar y el acusado se paró y se fue del lugar.”

Octavo: Que, para determinar si se configura el vicio de nulidad que motiva el recurso, debe tenerse en cuenta que según la acusación fiscal, reseñada en el basamento Segundo del fallo en revisión, los hechos atribuidos al acusado configuran el delito de femicidio íntimo, previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal, en grado de frustrado y el delito de maltrato habitual en grado de consumado, correspondiéndole a Ramos Hormazabal participación en calidad de autor en ambos ilícitos.

En lo que interesa a la materia del recurso, el persecutor tanto en el alegato de apertura como de clausura sostuvo la calificación jurídica e *iter criminis*, postulados en la acusación, requiriendo condenar al encartado como autor del delito de femicidio íntimo, previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal, en grado frustrado.

Por su parte, la defensa, en la clausura sostuvo la existencia de dolo de lesionar no dolo de matar. Alude al testimonio de la profesional médico en cuanto explica que la asfixia mecánica por estrangulamiento cuando se realiza con parte del cuerpo y no con algún elemento, cuando estas maniobras se ejercen de forma violenta o extrema, de acuerdo a la medicina legal se produce un levantamiento de la tráquea y eso trae consecuencias físicas para las víctimas que perduran en el tiempo, particularmente en materia de habla y de deglución. Luego aduce el defensor que nada de eso estuvo presente o se hizo valer por el Ministerio Público para efectos de acreditar el dolo de matar. Además, en subsidio, si el tribunal estimara que efectivamente se configura un



delito de femicidio, alega la defensa que no puede ser un delito frustrado, sino que tentado.

Noveno: Que, en lo atinente a la calificación jurídica de los hechos, según se lee en el motivo Octavo del fallo en revisión, los sentenciadores indican que *“en cuanto al delito de femicidio íntimo en grado de frustrado por el que se dictó decisión de condena, este tribunal para dicha conclusión tuvo en consideración toda la prueba rendida por el ministerio público para dicho efecto”*. Enseguida se refieren a los dichos de la ofendida, de la testigo Danitza Moncada, del Carabinero Gallegos Troncoso, de la madre y hermana de la víctima.

Luego, sin precisar ni citar algún texto científico o testimonio de profesional experto, continúan los juzgadores refiriéndose a aspectos fisiológicos de lo que denominan la muerte por asfixia, consignando más adelante *“Pues bien, lo señalado precedentemente respecto de la estrangulación con las manos, se refiere a una persona que ha fallecido por estrangulación con las manos, sin embargo, en el presente caso la víctima no murió, de ahí que el delito de femicidio se encuentra en grado de frustrado, y es por esa circunstancia las lesiones de la víctima Jenifer Durán, lesiones en la zona cervical en su brazo y pierna derecha, las que efectivamente no son de la entidad propias del estrangulación con resultado de muerte, pues como ya se ha dicho el delito se frustró. Con todo, no está demás recalcar que lo antes mencionado refuerza lo declarado por los testigos, pues la víctima fue clara en señalar que Álvaro Ramos intentó ahorcarla, intento del que fue testigo presencial la testigo Danitza Moncada. De su parte las lesiones pesquisadas por Yanlenys Varela así como lo consignado en el dato de atención de urgencia, guardan armónica y coherente relación con los hechos descritos por la víctima y la testigo, presentando el resto de la prueba el carácter de testigos de oídas, todos ellos fueron concordantes con lo manifestado por la víctima en el juicio oral.”*

Décimo: Que, a continuación, en el mismo basamento Octavo, y en lo concerniente a las alegaciones de recalificación postuladas por la defensa, argumentan los magistrados que *“con relación a este delito de femicidio, corresponde recordar que la defensa manifestó no discutir los hechos, sino que solicitó su recalificación jurídica al delito de lesiones de lesiones leves en*



contexto de violencia intrafamiliar, y en eso hizo consistir su prueba. En efecto, la defensa sostuvo que en la especie obró dolo de lesionar y no dolo de matar, sin embargo dicha alegación, a juicio del tribunal, no se condice con la dinámica de los hechos, porque es evidente que si una persona al poner su antebrazo y una de sus manos en el cuello de otra, es decir que la estrangula, no cabe duda de que lo que hubo aquí, fue dolo de matar y no de lesionar. Otra cosa es que las lesiones constatadas en el SAR Violeta Parra hayan sido catalogadas de leve, pero eso no significa en modo alguno que no sean condignas de un femicidio frustrado”.

Undécimo: Que, en el caso *sub lite*, queda de manifiesto que los sentenciadores omitieron un análisis pormenorizado respecto de una de las peticiones expresas de la defensa, esto es, que el ilícito de femicidio íntimo se encontraba en grado de ejecución tentado y no frustrado como lo sostuvo el acusador.

Teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 7 del Código Penal, y considerando que la etapa de tentativa se diferencia de la de frustración, según haya terminado o no el autor la actividad personal que conforme a su plan debía ejecutar para concretar el delito, la petición de la defensa obligaba a los juzgadores a explicar fundadamente las razones por la que, en base a toda la prueba rendida, desestimaban que la conducta de Ramos Hormazabal pudiera encuadrarse en la hipótesis de la tentativa que dicha norma contempla, resultando insuficiente lo concluido en el considerando Décimo, toda vez que habiéndose planteado la disyuntiva entre dos grados de ejecución imperfectos es deber del Tribunal hacerse cargo de ambas y explicar por qué acoge una y desecha la otra, lo que en el caso de marras no ocurrió.

De lo expuesto resulta que el fallo recurrido incurre en inconsistencias en la argumentación y falta de explicaciones, tanto para reafirmar la hipótesis de los acusadores -acogida por el Tribunal- como para desestimar la hipótesis postulada por la defensa, considerando especialmente lo aportado por la médica señora Varela Pérez, cuyo testimonio aparece a lo menos incompleto en la transcripción consignada en el texto de la sentencia.

Duodécimo: Que, en consecuencia, si bien los jueces establecen la existencia del delito de femicidio frustrado, omiten explicar las razones por las



cuales desechan la alegación de la defensa en cuanto a que el grado de ejecución del delito es tentado, lo que deriva en que tal conclusión se basa en argumentaciones incompletas, omitiendo el análisis íntegro de la prueba en relación a tal línea defensiva, falencia que trasgrede el requisito del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, antes referido, configurándose así -en lo que a este delito se refiere- la causal del artículo 374 letra e) del mismo cuerpo legal.

Décimo Tercero: Que, el vicio detectado tiene influencia en lo dispositivo del fallo porque la decisión adoptada carece de justificación, debiendo acogerse el recurso incoado por la defensa.

Por estas consideraciones, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 360, 372, 374 letra e), 378, 384 y 386 del Código Procesal Penal, se resuelve que:

I.- Se *acoge* el recurso de nulidad interpuesto por el defensor particular Rodrigo Orrego Luengo, en representación del condenado Álvaro Alexis Ramos Hormazábal, en cuanto se invalida parcialmente la sentencia de 12 de agosto pasado, dictada en la causa RIT N° 110-2024 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, así como el juicio oral que dio origen al fallo, en aquella parte que condenó al acusado como autor de un delito frustrado de femicidio, perpetrado el día 29 de enero de 2023 en la comuna de Chillán, en la personade Jenifer Andrea Vera Durán.

II.- En consecuencia, el nuevo juicio oral que se realice ante un Tribunal no inhabilitado, solo comprenderá la acusación fiscal en relación con el delito de femicidio frustrado que se imputa a Álvaro Alexis Ramos Hormazábal.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Paulina Gallardo García.

No firma el Ministro señor Claudio Arias Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

RoI N° 773-2024.- PENAL.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VJXTQXNKFX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministra Paulina Gallardo G. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Viguera S. Chillan, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a siete de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VJXTXQXNKFX